El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría de esta Corporación.

Providencia: Sentencia del 30 de agosto de 2018

Radicación No.: 66001-31-05-000-2018-00354-01

Proceso: Acción de tutela

Accionante: Aleyda Gil Díaz y Eduardo Noreña Gallego

Accionado: Policía Nacional, Instituto de Movilidad y Ministerio de Defensa

Juzgado de origen: Cuarto Laboral del Circuito de Pereira

**Temas:**  **DEBIDO PROCESO EN LA IMPOSICIÓN DE UN COMPARENDO/ DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO/ LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA/ REQUISITO DE CONSTITUIR LA PÓLIZA SOAT EN EL MEDIO DE TRANSPORTE/ CONFIRMA.**

Encuentra la Sala que tal como lo ha indicado el A – quo, el señor Edgar Noreña Gallego, no ha acreditado ser el cónyuge o compañero permanente de la accionante, ni mucho menos figura en los documentos del vehículo (fl. 8), no siendo posible establecer que haya sido afectado en sus derechos con las acciones que motivaron la interposición de la acción, por lo cual no se le tendrá como parte.

(…)

De la interpretación de esta norma, se puede deducir que el establecer la legalidad del medio de transporte, entre cuyos requisitos está portar un SOAT vigente, es una de las causales que el legislador dispuso para que la Policía pudiese efectuar el registro de vehículos, lo que no resulta violatorio de la Constitución.

En consecuencia, no se puede decir que a la señora Aleyda Gil Díaz le fue vulnerado su derecho al debido proceso, puesto que el comparendo que se le realizó el pasado 14 de julio de 2018, fue adelantado por la autoridad competente, esto es, un agente de tránsito inscrito al Instituto de Movilidad de Pereira; se basó en una conducta sancionable como lo es conducir sin portar los seguros ordenados por la ley[[1]](#footnote-1); se le indicó sobre el derecho a la reducción de la multa; y se le asignó fecha para audiencia pública en la que podrá aportar pruebas y ejercer su derecho de defensa, siendo esta audiencia el espacio indicado para resolver la controversia.

**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA**

**SALA DE DECISIÓN LABORAL No. 1**

Magistrada Ponente: **Ana Lucía Caicedo Calderón**

**Acta No. \_\_\_**

**(Agosto 30 de 2018)**

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra el fallo proferido el 2 de agosto de 2018 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela impetrada por **Eduardo Noreña Gallego** y **Aleyda Gil Díaz** en contra de la **Policía Nacional,** el **Instituto de Movilidad** y el **Ministerio de Defensa** por medio de la cual solicitan que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, libertad, movilidad y mínimo vital.

#### La demanda

Los aludidos accionantes solicitan: i) la devolución del vehículo inmovilizado ; ii) que se anule el comparendo emitido; y iii) que se oficie a la Policía Nacional para que investigue la posible falta disciplinaria en la que incurrieron los policías que detuvieron el rodante, así como el posible secuestro simple, para la compulsa de copias a la fiscalía.

Para fundar dichas pretensiones manifiestan que el 13 de julio del presente año, los agentes de policía del CAI de Cuba realizaron un reten en la vía que conduce del barrio Los Libertadores al Parque el Oso del barrio Cuba.

Señalan que dicho reten era ilegal puesto que los agentes que lo realizaron detenían a los conductores sin que dieran motivo alguno, con el fin de solicitarles los documentos del vehículo, sin ser ellos policías de carreteras o tener una orden judicial, y en caso de que detectaran alguna falta en los documentos llamaban a Tránsito, para que los auxiliares bachilleres de esa entidad iniciaran el procedimiento correspondiente basándose en la información que los policías les daban.

Indican que la señora Aleyda Gil Díaz cruzaba por esa vía, conduciendo el vehículo de placas IBN 955, y agentes de la policía le dieron la señal de pare, una vez el vehículo se detuvo le ordenaron exhibir los documentos del mismo, encontrando que el SOAT había vencido, por lo cual procedieron a llamar a Tránsito y pedir una grúa para la inmovilización.

Afirman que cuando llegaron los guardas de tránsito le solicitaron nuevamente exhibir los documentos del automotor, pero ella se negó, por lo que le impidieron seguir su trayecto, reteniéndola en ese lugar.

Refieren que al sitio arribó el señor Eduardo Noreña, esposo de la señora Aleyda, quien fue constreñido por los policiales, exigiéndole que les enseñara los documentos del vehículo, pero como este también se opuso procedieron a elaborar un comparendo.

Argumentan que frente esa situación, se vieron obligados a acceder a que se realizara el procedimiento irregular, el cual conllevaba, además del comparendo, la inmovilización del vehículo.

Manifiestan que el 16 de julio compraron el SOAT y se presentaron ante la autoridad de Tránsito, siendo atendidos por el inspector de la entidad, quien hizo caso omiso a la irregularidad en el procedimiento y se limitó a decirles que debían cancelar el 50% de $1.200.000 dentro de los 5 días siguientes, ya que si se realizaba la audiencia se les cobraría la totalidad de ese valor.

Por último indican que el sustento de la señora Aleyda depende del uso del automotor, toda vez que transporta quesos para vender a domicilio.

#### Contestación de la demanda

El Instituto de Movilidad de Pereira contestó la presente acción manifestando que a la señora Aleyda Gil le realizaron el comparendo No. 800020270358 el 14 de julio de 2018, por el código de infracción D-02 “conducir sin portar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ordenado por la ley”, infracción que da inmovilización del vehículo de acuerdo a la Ley 769 de 2002.

Indica que cuando los accionantes acudieron a la entidad, el inspector les informó que si cancelaban la multa durante los (5) días hábiles siguientes a la imposición de la misma se les realizaría un descuento del 50%, tal como lo estípula el artículo 136 del Código Nacional de Tránsito, sin embargo la señora Aleyda no estuvo de acuerdo con ello, por lo cual se solicitó audiencia publica, siendo fijada para el 5 de septiembre de 2018 a las 9:00 am.

Señala que a los actores no se les violó derecho constitucional alguno, ya que el Instituto ha actuado con total apego a la ley, y se les ha concedido la audiencia donde podrán ejercer su derecho de defensa y contradicción, aportando y solicitando las pruebas que consideren necesarias.

Agrega que la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal en cuanto a actos administrativos y actos sancionatorios por cuanto el peticionario cuenta con otros mecanismos tanto administrativos como judiciales para ejercer su defensa, citando para ello jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Por su parte la Policía Metropolitana de Pereira respondió la acción indicando que en este caso no es procedente, toda vez que los actores cuentan con otro mecanismo en procura de la defensa de sus derechos, pues conforme al artículo 222 de la Ley 1801 de 2016, en contra de la orden de Policía o medida correctiva procederá el recurso de apelación, el cual se remite al Inspector de Policía quien deberá resolverlo dentro de las 24 horas siguientes.

Por otro lado señaló que los miembros de la institución pese a no pertenecer a la especialidad de tránsito pueden requerir a los conductores a fin de verificar la información que permita su individualización y la del vehículo, para con ello evitar la materialización de hechos con los que se pueda alterar la seguridad y convivencia ciudadana, actuar que obedece a lo estipulado en el inciso 3º del artículo 160 de la Ley 1801 de 2016, y que es reiterado por la Corte Constitucional en sentencia C -789 de 2006.

La Dirección de Tránsito y Transporte contestó la presente acción manifestando que no resulta procedente la vinculación de la entidad, puesto que existe falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que el caso fue conocido por el agente AT148 de nombre ROYER AGUDELO GARCIA, quien se encuentra adscrito al Instituto Municipal de Tránsito de Pereira y no a esta entidad.

Añade que la actividad de la Policía Nacional, independientemente cual sea su especialidad, esta encaminada a preservar la convivencia y a restablecer los comportamientos que transgredan las normas, es por ello que, los Policías aunque no estén adscritos a la Dirección de Tránsito y Transporte, están en la obligación de intervenir ante un caso que altere la convivencia ciudadana, como lo es una contravención de tránsito, actuar que obedece a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1801 del 2016, según el cual es deber de las autoridades policiales hacer cumplir las leyes y normas; en el mismo sentido el artículo 8 de la Ley 62 de 1993 estipula que el personal uniformado de la Policía Nacional, cualquiera que fuere su especialidad, tiene la obligación de intervenir frente a los casos de policía, de acuerdo con la Constitución Política.

Refiere que con base en la normatividad anterior, es preciso señalar, que ante la imposibilidad de un Policía de cualquier especialidad, que no pertenezca a la Dirección de Tránsito y Transporte, de realizar ordenes de comparendo, el único medio eficaz para dar a conocer la comisión de una contravención es el informe de policía o la manifestación verbal realizada a uno de los funcionarios de esta entidad, donde le de a conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaecieron los hechos, por consiguiente es valido que ante esa información se proceda a la elaboración de una orden de comparendo.

#### Providencia impugnada

El Juez de primer grado negó el amparo pretendido por improcedente, y desvinculó de la acción al Ministerio de Defensa – Policía Nacional-.

Para llegar a tal conclusión el A-quo argumentó, en principio, que no se consideraría como parte al señor Eduardo Noreña, toda vez que no demostró ser el cónyuge de la accionante, ni ser titular de los derechos presuntamente vulnerados.

Indicó que así mismo no está legitimado por pasiva el Ministerio de Defensa – Policía Nacional -, pues quien expidió el comparendo que se presume violatorio de los derechos fue un funcionario del Instituto de Movilidad de Pereira y no aquella entidad.

Seguidamente señaló que el comparendo está definido como “*una orden formal de notificación para que el presunto contraventor o implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una infracción*”[[2]](#footnote-2), lo que significa que no tiene carácter de sanción, y que además fue expedido por un funcionario del Instituto de Movilidad de Pereira, quien esta facultado para ello, ya que la actora no asumió la culpa de la contravención de tránsito, programándosele audiencia para el 5 de septiembre de 2018.

Agregó que no puede alegarse la vulneración de los derechos de defensa y contradicción, toda vez que es evidente la ausencia del SOAT, lo cual tiene como consecuencia la inmovilización del vehículo por haber incurrido en la infracción DO2 consagrada en la Ley 769 de 2002, observándose así que la entidad accionada dio cumplimiento al procedimiento establecido en la ley.

Frente al derecho al mínimo vital que refiere la accionante le fue vulnerado, manifestó que en el expediente no existe prueba de que la señora Aleyda Gil, dependa del vehículo al ser expendedora de lácteos, pues la sola manifestación de ello no le daba certeza acerca de su transgresión.

En cuanto a la solicitud de oficiar a la Policía Nacional para investigar la presunta posible incursión en el punible de secuestro simple, señaló que la vía constitucional en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales que establece la ley, por que lo que la accionante deberá gestionar las denuncias ante los entes pertinentes.

#### Impugnación

La accionante impugnó la decisión arguyendo que, conforme al artículo 4º de la Constitución, la aplicación de los preceptos constitucionales se debe hacer en todos los casos, y de acuerdo con el artículo 28 ejusdem nadie puede ser molestado sino en virtud de un mandamiento escrito de autoridad judicial competente o por motivo previamente definido en la ley.

Añade que el artículo 160 de la Ley 1801 del 2016, que permite el registro a medios de transporte por parte de la Policía Nacional, indica que podrá efectuarse el registro, en los siguientes casos i) de conformidad con las disposiciones que rigen la materia, ii) cuando se tenga conocimiento o indicio de que el medio de transporte esta siendo utilizado para la comisión de un comportamiento contrario a la convivencia, iii) en desarrollo de una operación policial o por mandamiento judicial.

Afirma que acorde a lo anterior, cuando le solicitaron los documentos del vehículo, fue sin cumplir con alguno de los parámetros referidos en el mencionado artículo, y que además el automotor fue detenido sin motivo previo, hecho que resulta inconstitucional, por lo que indica que el fallo proferido debe ser revocado en su integridad pues desconoce la supremacía de la Constitución Política de Colombia.

#### Consideraciones

**5.1 Problema jurídico por resolver**

Determinar si existe vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, libertad, movilidad y mínimo vital de los accionantes, a quienes luego de verificarse los documentos del vehículo por parte de agentes de la Policía Nacional, se les impuso un comparendo y se inmovilizó el automotor, a consecuencia de transitar con el SOAT vencido, comparendo emitido por autoridad de Tránsito.

**5.2 Debido proceso en la imposición de un comparendo**

Al respecto la Corte Constitucional C-503 de 2003, ha indicado lo siguiente:

“*En cuanto a la supuesta violación al debido proceso, es menester anotar que el levantamiento de un comparendo no puede asimilarse a la imposición de la sanción pues, como ya fue anotado, el comparendo es una orden formal de notificación para que el presunto contraventor o implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una infracción. Así, si se presenta ante la autoridad competente, puede ejercer su derecho a la defensa y el comparendo advierte la posibilidad de nombrar un apoderado. Siendo así, no son de recibo los cargos de la demanda sobre la violación del debido proceso, pues el infractor es informado de todas las posibilidades que tiene para afrontar la imputación.*”

**5.3 Derecho fundamental a la salud de las personas víctimas de accidentes de tránsito**

Como quiera que uno de los hechos relevantes en está acción es que al momento del registro del vehículo, se encontró que el SOAT estaba vencido, vale la pena determinar la importancia de este seguro obligatorio.

Del tema se encargó la Corte Constitucional en sentencias como la T - 1223 de 2005 donde ha manifestado lo siguientes:

*“El sistema de salud en Colombia prevé un seguro obligatorio de accidentes de tránsito para todos los vehículos automotores que transiten en el territorio nacional, cuya finalidad es amparar la muerte o los daños corporales que se causen a las personas implicadas en tales eventos, ya sean peatones, pasajeros o conductores, incluso en los casos en los que los vehículos no están asegurados. Dicho amparo comprende los gastos de atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, incapacidad permanente, gastos funerarios y los de transporte de las víctimas a las entidades prestadoras de servicios de salud, es decir, una atención médica integral.”*

Posteriormente, la Corte en sentencia T - 463 de 2009, indicó frente a este asunto lo siguiente:

*Para el caso específico de los accidentes de tránsito y la implicación de estos siniestros en la salud de las personas, como lo reitera la sentencia T-683 de 2008, la forma de aseguramiento y la atención médica prevista por el Sistema de Seguridad Social en Salud tiene unas características particulares. El Sistema prevé la existencia de un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito -SOAT- para todos los vehículos automotores que circulen en el territorio nacional. (…) Así, el Seguro Obligatorio por Accidentes de Tránsito (SOAT), como instrumento de garantía del derecho a la salud de personas lesionadas en accidentes de tránsito, cumple una función social y contribuye claramente al fortalecimiento de la infraestructura de urgencias del Sistema Nacional de Salud.*

**5.4 Caso concreto**

En el caso que ocupa la atención de la Sala, los señores Edgar Noreña Gallego y Aleyda Gil Díaz presentaron acción de tutela, con el fin de que se les garanticen sus derechos fundamentales al debido proceso, libertad, movilidad y mínimo vital, alegando su vulneración, al haber sido requerida la actora, por parte de miembros de la Policía Nacional, para que exhibiera los documentos del vehículo, quienes al encontrar que el SOAT estaba vencido, acudieron al Instituto de Movilidad de Pereira, entidad que por medio de uno de sus agentes realizó un comparendo y la respectiva inmovilización del rodante.

Encuentra la Sala que tal como lo ha indicado el A – quo, el señor Edgar Noreña Gallego, no ha acreditado ser el cónyuge o compañero permanente de la accionante, ni mucho menos figura en los documentos del vehículo (fl. 8), no siendo posible establecer que haya sido afectado en sus derechos con las acciones que motivaron la interposición de la acción, por lo cual no se le tendrá como parte.

Frente a este asunto es preciso señalar que, todo propietario de un vehículo que transita por el territorio colombiano debe tener vigente en todo momento una póliza SOAT, la cual garantiza los recursos requeridos en la atención de víctimas de accidentes de tránsito, protegiendo de esta manera la salud de terceros que se puedan verse afectados por hechos derivados de la circulación de un automotor, ello de acuerdo al artículo 42 del la Código Nacional de Tránsito.

Asumiendo que la actora utiliza el vehículo de placas IBN 955 como medio para desempeñar su trabajo, y en vista de que todo vehículo que circula sobre el territorio nacional debe someterse a las normas que determine el Código Nacional de Tránsito, era su deber y obligación como conductora contar con el SOAT al día, máxime cuando de ello deriva su sustento, obligación que lejos de obstaculizar su derecho al trabajo, como parece insinuarlo la tutelante, la protege de toda contingencia que pudiese derivarse de la acción de conducir, de manera que no existe enfrentamiento entre el derecho al trabajo y el derecho a la salud de las personas víctimas de accidente de tránsito.

Por otra parte, si bien la accionante indica en los hechos que el 16 de julio del presente año renovó la referida póliza, ello no es razón suficiente para anular el comparendo ya emitido, pues este se impuso con base en los hechos del 14 de julio del mismo año.

Frente a la presunta vulneración al debido proceso, comparte esta Sala las consideraciones expresadas por el Juez de instancia, toda vez que la Policía Nacional actuó conforme a derecho, pues contrario a lo que la actora indica en la impugnación sobre los parámetros para realizar el registro del vehículo, el artículo 160 de la Ley 1801 de 2016 estableció:

“*El personal uniformado de la Policía Nacional podrá efectuar el registro de medios de transporte públicos o privados, terrestres, aéreos, marítimos y fluviales, y de los paraderos, estaciones, terminales de transporte terrestre, aeropuertos, puertos y marinas, de conformidad con las disposiciones que rigen la materia, y en los siguientes casos, para garantizar la convivencia y la seguridad: (Subraya fuera del texto)*

(…)

Para establecer la titularidad del derecho de dominio del medio de transporte y verificar la procedencia y la legalidad del medio de transporte, y de los bienes y objetos transportados. *(Subraya fuera del texto)*

De la interpretación de esta norma, se puede deducir que el establecer la legalidad del medio de transporte, entre cuyos requisitos está portar un SOAT vigente, es una de las causales que el legislador dispuso para que la Policía pudiese efectuar el registro de vehículos, lo que no resulta violatorio de la Constitución.

En consecuencia, no se puede decir que a la señora Aleyda Gil Díaz le fue vulnerado su derecho al debido proceso, puesto que el comparendo que se le realizó el pasado 14 de julio de 2018, fue adelantado por la autoridad competente, esto es, un agente de tránsito inscrito al Instituto de Movilidad de Pereira; se basó en una conducta sancionable como lo es conducir sin portar los seguros ordenados por la ley[[3]](#footnote-3); se le indicó sobre el derecho a la reducción de la multa; y se le asignó fecha para audiencia publica en la que podrá aportar pruebas y ejercer su derecho de defensa, siendo esta audiencia el espacio indicado para resolver la controversia.

En mérito de lo expuesto, la **Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira**, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución y la ley,

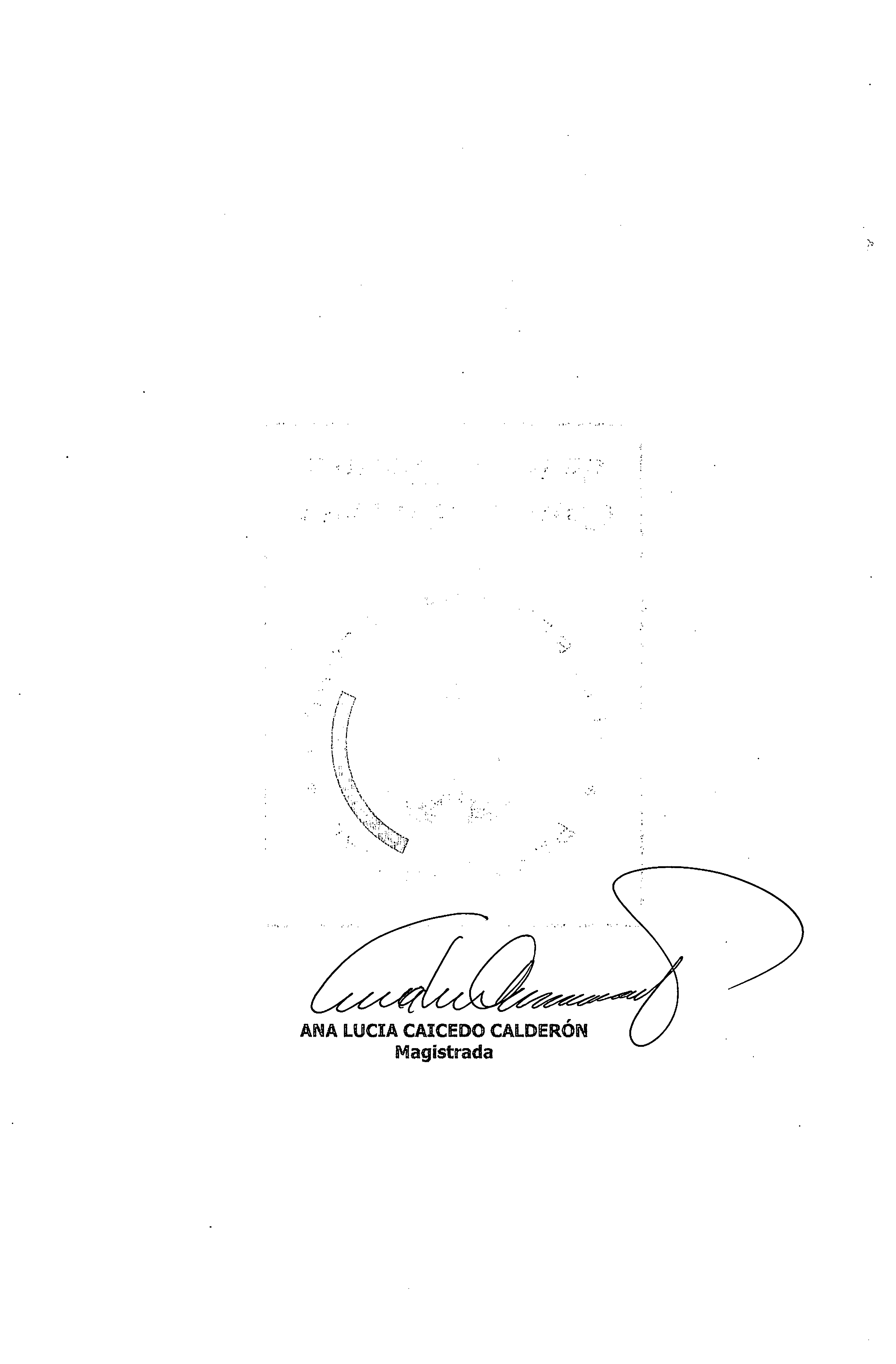
#### RESUELVE

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el 2 de agosto de 2018, pero por las razones aquí expuestas.

**SEGUNDO:** Notifíquese la decisión por el medio más eficaz**.**

**TERCERO:** Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese y Cúmplase



**OLGA LUCÍA HOYOS SEPULVEDA JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ**

**Magistrada Magistrado**

En uso de permiso

**ALONSO GAVIRIA OCAMPO**

Secretario

1. Artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, modificado por el art. 21 de la Ley 1383 de 2010. [↑](#footnote-ref-1)
2. Articulo 2 Ley 796 e 2002 [↑](#footnote-ref-2)
3. Artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, modificado por el art. 21 de la Ley 1383 de 2010. [↑](#footnote-ref-3)